Globethics Repository



Pretorianismo, Legitimidad y Opinión Pública [Praetorianism, Legitimacy and Public Opinion]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Koeneke, Herbert
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-12 11:46:23
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/221376

Nueva Sociedad Nro. 81 Enero-Febrero 1986, pp. 69-76

Pretorianismo, Legitimidad y Opinión Pública

Herbert Koeneke

Herbert Koeneke: Comunicador social venezolano. Doctor en Filosofía y Ciencias Políticas, Ph. D. en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Profesor de Postgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón Bolívar.

El pretorianismo o derrocamiento de gobiernos civiles por los militares ha sido atribuido por distintos autores a causas tan diversas como las políticas, las económicas, las burocráticas u organizacionales, etc. Estas explicaciones tan variadas tienen sin embargo algo tan común: ellas sugieren de manera implícita o explícita, que los golpes se producen cuando, existiendo cualesquiera de dichas causas, el gobierno civil pierde apoyo o legitimidad. De allí que a este elemento se le considere el precipitante inmediato de la intervención.

Como se verá a lo largo de estas páginas, esa pérdida de apoyo o de legitimidad es conceptualizada muchas veces en términos cuantitativos o mayoritarios, es decir, como una erosión generalizada en la identificación de los ciudadanos con el gobierno de turno, con la élite dirigente o con el propio sistema político.

Es de hacer notar desde el comienzo, que esta manera de enfocar la relación entre delegitimación e intervencionismo no ha estado circunscrita al ámbito académico. Más bien, dicho enfoque se ha difundido entre distintas élites sociales y políticas, cuyos miembros patrocinan con alguna regularidad sondeos de opinión pública destinados a indagar cómo se evalúa la gestión del gobierno de turno, cuál es su nivel de aceptación entre la colectividad y en qué medida la "opción militar" es considerada una salida política deseable.

En este trabajo se argumenta que la mencionada conceptualización no parece ser más apropiada y que existe una alterna que podría resultar más fructífera para explicar la relación entre pérdida de legitimidad y pretorianismo.

El concepto de legitimidad, tal como lo definió Max Weber, denota un tipo de dominación en el cual los subordinados aceptan voluntariamente la autoridad de otros sobre ellos. La aceptación voluntaria constituye el elemento central de la definición, pues permite distinguir un poder que es ejercido legítimamente de otro, el ilegítimo, que es impuesto por la fuerza.

Para Weber, las relaciones de dominación legítima comprendían tres clases o tipos diferentes: la carismática, la tradicional-patrimonial y la legal-racional. En el primer caso, la relación se establece en tiempos de crisis agudas gracias a una interacción mesiánica entre un líder extraordinario y de inspiración salvacionista y sus ansiosos seguidores. El segundo tipo se caracteriza porque el ejercicio de autoridad es colectivo y organizado, es decir, concentrado en un "staff" político cuyos miembros dependen para su manutención del patrimonio del máximo líder. La autoridad de éste deriva no ya de sus extraordinarias condiciones personales, sino de su capacidad para dar prebendas a título personal. En el último tipo, la captación de autoridad está basada en un vínculo impersonal, formalmente establecido y del imitado como ley, que no depende de las características personales de quien gobierna, ni de las prebendas que éste otorga a sus colaboradores, sino de la creencia en la bondad del proceso abstracto de formulación de normas[1].

En la terminología más reciente del lenguaje funcionalista, la legitimidad no es otra cosa que el apoyo brindado por la colectividad a quien la gobierna. Apoyo que, de perderse, hace propicias las condiciones para que se produzca un cambio de gobernantes. Por ello es que para los estudiosos del pretorianismo, la deligitimación de un régimen civil actúa como precipitante de la intervención militar, una vez que se encuentran presentes otras causas.

CAUSAS DEL PRETORIANISMO Y LEGITIMIDAD

A continuación se analizan las causas más frecuentemente citadas en este contexto y se intenta dilucidar la forma en que los modelos causales del pretorianismo afrontan el problema de la delegitimación política:

1. Movilización social y debilidad de las instituciones políticas ("sociedades pretorianas"): de acuerdo con este influyente modelo, asociado con el nombre de Samuel Huntington, la politización de los militares se halla vinculada con el

1 Weber, M.: "The social psychology of the world religions", en H. Gerth y W. Mills, editores, From Max Weber: **Essays in Sociology**, Oxford University Press, N.Y., 1958, pp. 295-299.

advenimiento de las llamadas "sociedades pretorianas"[2]. En éstas la incorporación de nuevos grupos al proceso político es tan veloz y dramática, que las instituciones del sistema se muestran incapaces de atender adecuadamente la multiplicidad de demandas que se lanzan sobre ellas. Es por eso que los diversos grupos e intereses sociales se enfrentan abierta y descarnadamente al margen de canales institucionales de resolución de conflictos. "Los adinerados sobornan, los estudiantes se amotinan, los obreros se declaran en huelga, las multitudes realizan manifestaciones y los militares golpean"[3].

Desde el punto de vista de la legitimidad, este modelo supone lógicamente la ruptura de las "viejas" reglas del juego político, esto es, presume que la aceptación voluntaria de un tipo específico de dominación es inexistente o débil.

2. El vacío de poder: este modelo puede considerarse en realidad como una versión restringida del anterior. La idea esencial del mismo es que allí donde las organizaciones políticas, y especialmente los partidos, carecen ostensiblemente de habilidad para solucionar los problemas del país, las fuerzas armadas tienden a erigirse en sustitutos o reemplazos suyos[4].

El énfasis, en este caso se pone sobre la pérdida de legitimidad o apoyo a los partidos como precipitante de la intervención militar.

3. La protección del interés corporativo u organizacional de las fuerzas armadas: de acuerdo con los exponentes de esta tesis, la intromisión civil en materias que los militares acostumbran a decidir y a ejecutar autónomamente (ascensos, nombramientos, fijación de salarios) y las acciones que ponen en peligro la integridad y la cohesión de la institución armada (creación de milicias, partidización y uso de los militares en funciones policiales) generan en la oficialidad marcados motivos intervencionistas[5].

Es claro que este modelo no implica en forma explícita alguna que un gobierno civil volcado a penetrar las fuerzas armadas deba carecer necesariamente de apoyo generalizado del público. La implicación que tiene es más bien, en primer término, que ese intento de penetración delegitima al poder gubernamental ante los militares y, en segundo término, que cualquier disminución ulterior del apoyo público al gobierno puede brindar a los militares la oportunidad para justificar una intervención.

4. El desempleo estructural de los militares: este modelo, usado para explicar las intervenciones ocurridas en el "cono sur" latinoamericano a partir de los años sesenta, postula: a) que las fuerzas armadas han adquirido un desarrollo

2 Huntington, S.: **El Orden Político en las Sociedades en Cambio,** Paidos, Buenos Aires, 1972.
3 Ibid, p. 179.
4 Véase Carranza, E.: **Fuerzas Armadas y Estado de Excepción en América Latina,** Siglo Veintiuno, México, 1978, pp. 227-228, y Mercier, L: "Hipótesis y Objeciones", en **Fuerzas Armadas, Poder y Cambio,** Editorial Tiempo Nuevo, Caracas, 1971, p. 9.
5 Véase Nordlinger, E.: **Soldiers in Politics**, Englewood Cliffs, Prentice Hall, N.Y., 1977.

profesional sin precedentes, b) que esas capacidades técnico profesionales desbordan ampliamente las estrechas funciones de defensa externa tradicionalmente asignadas a sus miembros y c) que esta capacidad tradicional ociosa se traduce para ellos en una situación de desempleo estructural, que los impulsa a buscar un rol nuevo y más amplio, incluyendo actividades en la esfera política doméstica[6].

Según los creadores de este modelo, la expansión del rol militar se produjo al tiempo que las sociedades afectadas experimentaban procesos de los que Huntington denomina "pretorianismo de masa", es decir, agudos conflictos por extender las bases de la participación y, en consecuencia, por redefinir los fundamentos de legitimación. En este contexto, las fuerzas armadas - convertidas en vanguardias bastante autónomas del Estado actuaron presumiblemente para autonomizar al mismo de los grupos sociales en pugna.

5. El cambio de estrategia económica: este modelo, formulado como el anterior para explicar fenómenos recientes de pretorianismo en Latinoamérica, enfatiza como principal elemento causal el reemplazo de la estrategia económica de sustitución de importaciones por una estrategia de crecimiento hacia afuera. De acuerdo con sus exponentes, esta última estrategia es ampliamente impopular debido a que impone cargas o sacrificios de manera muy desigual entre la población. Sacrificios estos de los cuales se dice que golpean especialmente a las mayorías asalariadas. En estas condiciones, los militares aparecen como los indicados para facilitar por la fuerza el cambio de estrategia económica[7].

En el presente caso, la pérdida de legitimidad afecta a los gobiernos, definidos como populistas, que diseñaron e instrumentaron la estrategia de sustitución de importaciones. La erosión de legitimidad no se produce, sin embargo, entre las mayorías, sino entre las élites que consideran "agotada" dicha estrategia y que se hallan dispuestas, con el apoyo de las armadas, a sustituirlas por otra.

6. La desmovilización de grupos o el mantenimiento del pacto de dominación: la tesis central de este modelo es que cuando se vislumbra una crisis participativa que amenaza el "pacto de dominación" vigente, los militares intervienen para excluir o cerrar el acceso de los nuevos grupos que luchan por ser incorporados al sistema de toma de decisiones públicas. Como lo sugiere Alain Rouquié, éstos no son golpes de Estado, sino golpes del Estado en contra de sectores recientemente movilizados[8].

En este modelo, claramente, la intervención militar no se precipita porque el gobierno haya perdido el apoyo del público políticamente incorporado, sino al contrario para evitar que las bases de ese apoyo o legitimidad sean redefinidas en

6 Barros de S. C., A. y Coelho, E.: "Military intervention and withdrawal in South America", *International Political Science Review,* 1981, 2.
7 Véase: Philip, G.: "Military-authoritarianism in South America: Brazil, Chile, Uruguay and Argentina", *Political Studies*, 1984, 32, pp. 2-3.
8 Rouquié, A.: **El Estado Militar en América Latina,** Siglo Veintiuno, México, 1984, p. 51.

unos términos tan amplios que hagan peligrar el pacto de dominación.

LEGITIMIDAD E INHIBICION POLITICA DE LOS MILITARES

Arriba se señaló que la pérdida de legitimidad de los gobiernos civiles es considerada como el precipitante por excelencia de la intervención política de los militares, una vez que existan ciertas condiciones políticas, sociales o económicas.

En esta parte del trabajo, el problema se enfocará a la inversa. Es decir, se analizará brevemente el argumento de que el apoyo generalizado a los regímenes políticos tiende a inhibir la intervención militar.

En primer lugar, figura el argumento de la "barrera moral". Si el gobierno goza de amplia aceptación o apoyo, los militares se topan con una barrera de opinión pública, cuya destrucción los llevaría a ser considerados como usurpadores del poder. En segundo término se afirma que, más allá de esta condena moral proveniente del público, cualquier intento por derrocar a un gobierno civil legítimo tiene amplias probabilidades de provocar estallidos de resistencia y de violencia popular y, en consecuencia, de forzar a los militares a asumir el aborrecido rol de policías. Por último, se dice que si un gobierno civil es legítimo, resulta muy probable que dentro de las propias fuerzas armadas se produzcan fracturas por el posible enfrentamiento entre los oficiales golpistas y los civilistas que defienden el orden constitucional establecido. Dado que los militares valoran altamente la cohesión interna de la institución armada, la eventualidad de ese enfrentamiento inhibe los golpes contra los gobiernos legítimos[9].

Estos argumentos parecen tener gran fuerza lógica. No obstante, como veremos, los mismos descansan sobre bases débiles además de hallarse en contradicción con eventos políticos más o menos recientes. Entre estas evidencias histórico-políticas, el golpe militar que derrocó el gobierno de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, constituye un claro ejemplo.

Gallegos, en efecto, había sido elegido Presidente de la República en diciembre del año anterior con una aplastante mayoría electoral de casi el 75% de los sufragios. En octubre de 1946, su partido Acción Democrática había asegurado ya el control de la Asamblea Constituyente al obtener el 78,4 por ciento de la votación para integrar ese cuerpo. A pesar de ese gran apoyo popular, Gallegos caía derrocado por los militares a los nueve meses de su inauguración presidencial.

Quienes han estudiado este caso de insurgencia militar atribuyen el origen de la misma a dos factores fundamentales. Por una parte, a la pretorianización social producida por la incorporación masiva y rápida de nuevos grupos al proceso político, sin que se hubieran desarrollado paralelamente instituciones capaces de regular pacífica y democráticamente el conflicto de intereses. En tal sentido se afirma que las administraciones del Trienio, incluida claro está la de Gallegos,

9 Nordlinger, op. cit., pp. 94-95.

fomentaron una explosión en la organización de grupos y que se caracterizaron por un enfrentamiento abierto y violento entre muchos de ellos. La violencia, atribuida en gran parte al gobierno, produjo además en algunos sectores el temor de resultar eventualmente aniquilados[10].

Por otra parte, se ha señalado también que una amenaza al interés corporativo de las fuerzas armadas incidió de manera decisiva en el golpe. De acuerdo con Winfield Burggraaff, en los años que van de 1945 a 1948 se desarrolló entre los oficiales una clara convicción, primero, de que se pretendía infiltrar los rangos militares desde el gobierno y, segundo, de que se intentaba crear milicias armadas entre los activistas del partido de gobierno. Estas acciones, reales o supuestas, generaron una atmósfera defensiva y de aprehensiones que llevó a fin de cuentas al golpe[11]. Lo cierto, en todo caso, es que la posible "barrera moral" representada por las mayorías electorales de Gallegos y su partido no pudo detener el golpe y que la resistencia del pueblo, que en teoría cabe esperar cuando se amenaza a un gobierno legítimo, no llegó a materializarse.

¿Por qué, habría de preguntarse, la legitimidad del régimen no funcionó como freno a la intervención? La razón principal parece radicar en que, si bien la administración de Gallegos gozaba de un apoyo público mayoritario, en cambio carecía de legitimidad a los ojos de las élites no vinculadas con el partido de gobierno. Acciones como los juicios de responsabilidad civil contra antiguos funcionarios públicos, la aprobación de un decreto percibido como atentatorio contra la educación privada (decreto 321), la sujeción directa de las policías municipales a la autoridad presidencial y, en general, la violencia contra los partidos de oposición, sirvieron para enajenar, a partir de 1946, el apoyo de distintas élites a los gobiernos del Trienio, es decir, a los de Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos. La creciente oposición de las élites fue reflejada con insistencia en la prensa diaria, como lo ejemplificó un mes antes del golpe la siguiente mancheta de Nacional: "Si algo puede ofrecer la revolución de octubre en su tercer aniversario, es una rectificación de sus errores que son muchos y una ratificación de sus aciertos, que son los menos"[12]. Esta opinión editorial fue realmente moderada en comparación con las expresadas reiteradamente por la prensa opositora.

Esta relación evidente entre pérdida cualitativa de legitimidad y pretorianismo ha sido hallada también en otros países. Alfred Stepan, por ejemplo, en su análisis sobre el militarismo brasileño encontró que los golpes exitosos posteriores a 1945 habían estado precedidos de una pérdida del apoyo brindado por las élites a los gobiernos populares de la época. Por el contrario, las intentonas golpistas habían resultado infructuosas cuando los gobiernos lograban conservar en lo esencial el

10 Véase Levine, D.: **Conflict and Political Change in Venezuela,** Princeton University Press, N.Y., 1973.

11 Burggraaff, W.: **The Venezuela Armed Forces in Politics,** University of Missouri Press, Columbia, 1972.

12 Citado por Velásquez, R. J.: "Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo", en **Venezuela Moderna,** Editorial Ariel, Caracas, 1979, p. 126.

apoyo de las élites[13].

De ahí que el autor llegase a la conclusión de que "la cuestión de la legitimidad implica algo más que el número de personas a favor de un hombre o una institución. En situaciones de crisis, el tipo y grado de apoyo u oposición a un gobierno a menudo reviste importancia fundamental"[14].

APOYO CUALITATIVO VS. APOYO CUANTITATIVO

La tesis de que el apoyo mayoritario o cuantitativo inhibe los golpes militares descansa, como se apuntó, sobre tres supuestos: primero, que el mismo impone una barrera moral; segundo, que puede traducirse en violencia pública si el gobierno es atacado, y tercero, que tiene el potencial para resquebrajar la cohesión de las fuerzas armadas, al enfrentar los oficiales constitucionalistas a los facciosos.

Después de considerar algunas experiencias históricas, la validez de estos supuestos necesita ser revisada. Como se vio en los casos de Brasil y Venezuela, los golpes militares exitosos tienden a estar precedidos de una pérdida **cualitativa** de legitimidad, aun cuando los gobiernos logren conservar el apoyo mayoritario del gran público. Es, pues, la pérdida cualitativa del apoyo de las élites, no la pérdida de apoyo cuantitativo o mayoritario, la que parece decisiva para precipitar la intervención y para asegurar su éxito.

Para explicar este fenómeno que contradice al sentido común y a ciertas "teorías" derivadas del mismo, dos tipos de factores tienen especial relevancia. Unos están relacionados con la naturaleza de la opinión pública y otros con la naturaleza de la participación política.

Atendiendo a ellos señalaremos para comenzar que el argumento sobre la "barrera moral" supone un público bien informado, con orientaciones y actitudes de apoyo político definidas y consistentes, así como dispuesto y capaz de expresar abiertamente sus puntos de vista favorables al gobierno y contrarios a la intervención. El siguiente argumento, relativo a la violencia popular que debería producirse cuando se atenta contra un gobierno legítimo, supone, además de la existencia de las condiciones anteriores, una disposición de ciudadanos a la lucha política en la calle.

Los estudiosos sobre opinión pública y participación política indican que los anteriores supuestos son fundamentalmente irreales. Como lo ha señalado reiteradamente un destacado investigador[15], los miembros del gran público tienden

13 Stepan, A.: **Brasil: los Militares y la Política,** Amorrortu, Buenos Aires, 1974.
14 Ibid, p. 112.
15 Converse, Philip: Véase su "Public opinion and voting behavior", en F. Greenstein y N. Polsby, editores, Handbook of Political Science 4 Reading, Mass: Addison, 1975; así como su "The nature of belief system in mass publics". En D. Apter, editor, **Ideology and Discontent,** Free Press, N.Y., 1964; véase también Kessel, J.: **Presidential Campaign Politics,** Homewood, III: The Dorsey Press, 1980, capítulo 7.

a permanecer políticamente mal informados y a poseer actitudes políticas inestables y poco coherentes. Además, su participación en eventos políticos es generalmente limitada, a menos que esos eventos se vinculen con las preocupaciones básicas de la vida cotidiana. Por último, el acceso que en calidad de vocero tiene el ciudadano común a los medios de comunicación masiva es sustancialmente reducido. De allí, obviamente, que estos factores obstaculicen tanto la edificación de una barrera moral, como la resistencia activa del público ante la usurpación del poder por los militares, aun suponiendo que sus miembros tuvieran los medios materiales para enfrentarse a éstos.

En contraste con este cuadro general de apatía, poca información y desinterés, las élites tienden a buscar activamente la información política, a ser participativas y a poseer actitudes cristalizadas y coherentes. Para ellas, a diferencia del ciudadano común, la información y el envolvimiento político generan beneficios materiales y simbólicos que superan a sus costos[16]. Pero además, los integrantes de este segmento tienen una capacidad muy superior de acceder a un medio de comunicación masiva en calidad de voceros que los restantes miembros de la sociedad. Por eso las posiciones asumidas por las élites ante el acontecer político tiene mayor resonancia pública y sus expresiones de oposición al gobierno constituyen, aparentemente, el principal indicio o señal a que atienden los militares antes de dar un golpe.

LEGITIMIDAD COMO RESERVA DE PODER

La legitimidad legal-racional sobre la que descansan las democracias es normalmente entendida en términos de la adhesión popular a un gobierno o régimen. Esta adhesión es, por su parte, generalmente operacionalizada en términos electorales y de opinión pública. Por eso, de un régimen que cuente con el voto o con la opinión favorable de las mayorías se dice que es legítimo.

Como se ha visto en este trabajo, la legitimidad así entendida no es garantía de abstencionismo político de los militares. La naturaleza de la opinión pública, los mecanismos de la participación política y el acceso a los medios de comunicación masiva actúan de consumo para generar un sesgo legitimador en favor de las élites y en detrimento de las masas. Por ello se ha afirmado aquí que es el apoyo de las primeras al gobierno el que mejor garantiza el civilismo de los militares y, a la inversa, que es su oposición al gobierno la que con mayor fuerza precipita los fenómenos pretorianos.

En realidad, estos hechos sugieren que la legitimidad implica algo más que una simple distribución de opiniones políticas y ese algo más, como lo ha indicado acertadamente un analista norteamericano, está constituido por reservas organizadas de poder, que sirven para respaldar los derechos o los deseos de un ciudadano o de un grupo[17]. Si éstos cuentan con la capacidad de movilizar recursos

16 Converse: "Public opinion and voting behavior", pp. 93-94.
17 Véase Stinchcombe, A.: **Constructing Social Theories,** Harcourt, N. Y., 1968.

en respaldo suyo, entonces puede decirse que poseen un poder legítimo efectivo; de lo contrario, que puramente formal.

Independientemente de que se esté de acuerdo o en desacuerdo con esta conceptualización, lo cierto es que, como se ha visto en este trabajo, una legitimidad restringida al plano formal resulta incapaz de cumplir su función como preservadora de la democracia. La última reserva organizada de poder está constituida por la fuerza de las armas. Y ésta, como el propio Weber se percató, es más fácilmente activada por las élites que por las masas[18].

CONCLUSIONES

El sentido común, a veces plasmado como "teoría científica", sugiere que el apoyo mayoritario a un gobierno sirve para garantizar su estabilidad. Y al contrario, que la pérdida de ese apoyo sienta las bases para su caída. En el caso concreto de las intervenciones militares, este tipo de razonamiento serviría para explicar por qué cuando existe desacuerdo general sobre quién debe gobernar una sociedad, el grupo con mayores recursos coercitivos tiende a imponerse sobre los restantes.

Este tipo de "explicación lógica" tiene, como se ha argumentado en este ensayo, grandes limitaciones empíricas. Para empezar, no sirve para dar cuenta de situaciones intermedias, esto es, aquéllas en las cuales no existe apoyo mayoritario, pero tampoco repudio general hacia un régimen o gobierno. Y menos aún, obviamente, para explicar intervenciones militares en situaciones en las cuales las mayorías de las bases ciudadanas aceptan como legítimo al gobierno de turno. Este último tipo de situación constituyó el foco del presente análisis. La conclusión esencial del mismo es que esas intervenciones son explicables en virtud de que la pérdida del apoyo de las élites (delegitimación cualitativa) ejerce una influencia desestabilizadora tal, que es capaz de neutralizar el efecto estabilizador representado por el apoyo cuantitativo - débil en expresión y en respaldo - de una masa que tiende a ser apática y desinformada. Este efecto diferencial de uno y otro tipo de apoyo permite dar cuenta del derrocamiento de Rómulo Gallegos en 1948; de Getulio Vargas en 1945[19]; de Vargas nuevamente en 1954 y de Joao Goulart diez años después. Y permite explicar también por qué los intentos golpistas de 1955 y 1961 concluyeron en fracasos, al no contar con el apoyo determinante de las élites brasileñas[20].

Los militares son una élite atenta que busca indicios sobre el apoyo con que cuenta el gobierno donde mejor los pueda hallar. Esos indicios, por razones de motivación política, de participación ciudadana y de influencia comunicacional, son provistos

18 Ibid, p. 161.

19 El derrocamiento de Vargas en 1945 no constituyó un golpe contra una democracia representativa, sino más bien contra un régimen relativamente autoritario y de corte corporativo. El Estado Novo varguista, sin embargo, estuvo edificado sobre una amplia coalición social, que contaba con el apoyo mayoritario de los trabajadores organizados. véase: Hughes, S. y Mikesti, K.: **Politics and Public Policy in Latin America,** Westview Press, soulders 1984, pp. 54-56.

20 Véase Stepan: op. cit., capítulo 5.

fundamentalmente por las distintas élites sociales y no por el hombre común, el cual, si bien tiene en teoría la "fuerza de los números", carece de los recursos simbólicos y materiales de la dirigencia para afianzar o debilitar a un determinado gobierno.

De las anteriores conclusiones se derivan dos implicaciones prácticas que merecen ser destacadas. La primera es que los indicadores agregados sobre la legitimidad de un régimen pueden resultar engañosos para predecir su inmunidad o su susceptibilidad al pretorianismo. La segunda es que, como consecuencia de lo anterior, esos indicadores deben ser usados en combinación con otros que, aunque posean menor elegancia estadística, sean capaces de revelar el grado de apoyo cualitativo existente en la sociedad. En este sentido, las opiniones editoriales de las élites, como lo demostró el estudio de Stepan[21], pueden brindar una ayuda invalorable.

Referencias

Weber, M., FROM MAX WEBER: ESSAYS IN SOCIOLOGY. p295-299 - New York, U.S.A., Oxford University Press. 1958; Gerth, H.; Mills, W. -- The social psychology of the world religions.

Huntington, S., EL ORDEN POLITICO EN LAS SOCIEDADES EN CAMBIO. - Buenos Aires, Argentina, Paidos. 1972.; Velásquez, R. J. -- Hipótesis y Objeciones.

Carranza, E., FUERZAS ARMADAS Y ESTADO DE EXCEPCION EN AMERICA LATINA. p227-228 - México, Siglo Veintiuno. 1978; Greenstein, F. -- Military intervention and withdrawal in South America.

Mercier, L., FUERZAS ARMADAS, PODER Y CAMBIO. p9 - Caracas, Venezuela, Editorial Tiempo Nuevo. 1971; Polsby, N. -- Military-authoritarianism in South America: Brazil, Chile, Uruguay and Argentina.

Nordlinger, E., SOLDIERS IN POLITICS. - New York, U.S.A., Englewood Cliffs, Prentice Hall. 1977; Apter, D. -- Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo.

Barros de S. C., A.; Coelho, E., INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW. - 1981; Public opinion and voting behavior.

Philip, G., POLITICAL STUDIES. 32. p2-3 - 1984; The nature of belief system in mass publics.

Rouquié, A., EL ESTADO MILITAR EN AMERICA LATINA. p51 - México, Siglo Veintiuno. 1984;

Levine, D., CONFLICT AND POLITICAL CHANGE IN VENEZUELA. - New York, U.S.A., Princeton University Press. 1973;

Burggraaff, W., THE VENEZUELA ARMED FORCES IN POLITICS. - Columbia, University of Missouri Press. 1972;

Anónimo, VENEZUELA MODERNA. p126 - Caracas, Venezuela, Editorial Ariel. 1979;

Stepan, A., BRASIL: LOS MILITARES Y LA POLITICA. - Buenos Aires, Argentina, Amorrortu. 1974;

Converse, Philip, HANDBOOK OF POLITICAL SCIENCE READING. - Mass., U.S.A., Addison. 1975;

Converse, Philip, IDEOLOGY AND DISCONTENT. - New York, U.S.A., Frer Press. 1964;

Kessel, J., PRESIDENTIAL CAMPAIGN POLITICS, HOMEWOOD. III - The Dorsey Press. 1980;

Converse, PUBLIC OPINION AND VOTING BEHAVIOR. p93-94 -

Stinchcombe, A.,

21 Ibid.